

XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán, 2007.

La ofensiva de Perón y la ortodoxia sindical contra los gobernadores de la Tendencia: notas sobre los casos de San Luis y Catamarca.

Bonavena, Pablo Augusto (UBA / UNLP).

Cita:

Bonavena, Pablo Augusto (UBA / UNLP). (2007). *La ofensiva de Perón y la ortodoxia sindical contra los gobernadores de la Tendencia: notas sobre los casos de San Luis y Catamarca. XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Tucumán, San Miguel de Tucumán.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-108/744>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

XI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia
19 al 22 de Septiembre de 2007
Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Nacional de Tucumán

Ponencia: “La ofensiva de Perón y la ortodoxia sindical contra los gobernadores de la Tendencia: Notas sobre los casos de San Luis y Catamarca”.

Mesa 81: “Conflicto y cambio social en la Argentina reciente: de los años ´60 a la actualidad”

Autor: Pablo Augusto Bonavena

Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

T.E. 4-957/0345

Mail: bonavenapablo@yahoo.com.ar

Autorizo su publicación en el CD de las jornadas.

Una vez que el Gran Acuerdo Nacional se puso en marcha, allá por el año 1971, Juan Domingo Perón intentó contener a las masas y a la clase obrera dentro de los límites institucionales y subordinarlas a los andariveles que imponía su proyecto. La tarea no era sencilla y el hecho de haber alentado a diferentes alas del peronismo durante su exilio generaba un escollo de gran envergadura, que finalmente no podría superar. El “juego pendular”, de izquierda a derecha,¹ en el manejo de los distintos sectores del peronismo, ponía de manifiesto una considerable cuota de impotencia para conducir y ordenar las distintas iniciativas impulsadas por las diversas fracciones. Asimismo, hacía observable una sobrecarga de maniobras tácticas que alejaban la posibilidad de armar una clara orientación estratégica.² En efecto, trató de equilibrar orientaciones políticas e ideológicas que tenían relaciones conflictivas, brindándole respaldo y espacio político a tendencias que se contraponían, buscando que una se neutralice con la otra para provocar un equilibrio que, a su vez, generara condiciones de posibilidad para una óptima conducción. La conclusión de esta política fue un incongruente armado político. Perón favoreció una variopinta mezcolanza de orientaciones por encima de

¹ Sobre el “doble juego” de Perón véase De Riz, Liliana: “Retorno y derrumbe: el último gobierno peronista”. Folios Ediciones. México, 1981.

² La ambigüedad en la dirección política, argucia usada con frecuencia, siempre se agota rápidamente como alternativa por el techo que impone a la acumulación real de fuerzas. Una vez lanzado el GAN, Perón encontró ese límite a los pocos meses. Trató de superar esta debilidad de su conducción, como veremos, por la acción militar aunque contara con un gran apoyo electoral, conciente de que el poder formal que brindan los votos no se transforman directamente en poder real.

cualquier claridad programática.³ Su postulación para hacer las veces de árbitro entre los distintos actores fue, cuanto menos, ingenua. Las fuertes y violentas disputas al interior de Partido Justicialista (PJ) ponían de manifiesto, día a día, el carácter inestable de las alianzas celebradas durante la apertura del sistema electoral. Ciertamente, el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) había albergado a las distintas fracciones identificadas con el peronismo, aunque no exclusivamente, en una compleja y tirante alianza que no tardaría en desnudar sus contradicciones estratégicas.

Luego del triunfo en las urnas, la composición del nuevo gobierno exponía claramente la diversidad ideológica y de intereses, contradicciones que entorpecían el desarrollo coherente de una sola línea de acción, en un escenario donde los enfrentamientos sociales, si bien no tenían el carácter semi-insurreccional que adquirieron bajo la Revolución Argentina, no cejaban y muchas veces, por el contrario, parecían agudizarse. En este marco, y en la perspectiva de superar los problemas que se presentaban, Perón emprendió una ofensiva política contra las fracciones más radicalizadas del peronismo y del conjunto del movimiento de masas, que combinaba dos líneas de acción: una legal y otra ilegal.⁴

Con la vuelta de Perón al país, el 20 de junio del '73, comenzaron estas acciones combinadas. Junto con el ataque armado sobre los sectores enrolados en la Tendencia Revolucionaria Peronista en Ezeiza,⁵ el viejo líder empezó a darle espesor ideológico a lo que llamó la “*depuración*”, cuando al día siguiente en un discurso señaló: “*Los peronistas tenemos que retornar a la conducción del Movimiento. Ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba*”. El mensaje era claro. Los peronistas -y él- deberían recuperar una dirección política que no estaba en sus manos. El golpe de estado contra Cámpora sería un paso inmediato de esta línea de acción y el nuevo presidente que lo sustituyó luego de una dudosa maniobra constitucional, Raúl Lastiri, hizo suya la citada directiva

³ Destaco la figura de Perón en tanto la personificación de una política que expresa intereses que, obviamente, lo trascendían. Incluso, es menester poner de relieve que las confrontaciones que aquí menciono no pueden ser localizadas meramente como una puja interna de un partido. Su alcance involucra al grueso de las fuerzas sociales articuladas en distintos territorios. Son sucesos que “pasan” por la interna peronista pero no se agotan o limitan a ese ámbito. Ponen en juego al conjunto de las fuerzas, sus expresiones políticas y las estrategias desplegadas.

⁴ Este planteo choca, claro está, con otra visión que le atribuye a Perón un fuerte apego institucional. Véase en tal dirección, Fernández Pardo, Carlos A. y Frenkel, Leopoldo: “*Perón. La unidad nacional entre el conflicto y la reconstrucción. 1971/1974*”. Ediciones del Copista. Córdoba, 2004. Páginas 468 y 469.

⁵ Por “tendencia revolucionaria” se entiende aquí a las distintas organizaciones que planteaban el desarrollo de “socialismo nacional” como horizonte estratégico, más allá de su difusa formulación. Comprende al sector que también suele ser localizado como la “izquierda peronista o “peronismo revolucionario”, espacio donde Montoneros era la fuerza con mayor peso e influencia.

reemplazando a los ministros vinculados a los sectores más combativos del peronismo.

La búsqueda de la institucionalización del conflicto a través de recursos constitucionales y parlamentarios abarcó, entre otros instrumentos, las leyes de Asociaciones Profesionales, de Prescindibilidad, de Conciliación Obligatoria, de Seguridad y Universitaria. Este “paquete jurídico” pretendía el ordenamiento social e imponer un andamiaje legal para disciplinar a la clase obrera y un ámbito hostil como el universitario.⁶

Los recursos ilegales fueron impulsados con más fuerza a partir de la muerte de José Ignacio Rucci. Así se conoció un *"Documento Reservado"* suscrito por el Consejo Superior Provisorio del Movimiento Justicialista, presentado en una reunión de todos los gobernadores y que llevaba al pie la firma de Perón.⁷

En el mismo se daban enérgicas instrucciones para que excluyan todo atisbo de *"marxismo"* de la organización partidaria. En uno de sus puntos más salientes, decía: *"En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia, al servicio de esta lucha, el que estará vinculado a un organismo central que se creará"*.⁸ Obviamente, este punto del documento aludía a la creación de un aparato de inteligencia paraestatal, por ende, ilegal, que se fundamentaba en la supuesta lucha contra el marxismo. Así nació la “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina) que al poco tiempo, el 21 de noviembre del '73, debutó atentando sin éxito contra la vida del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, que en aquel entonces encabezó la oposición parlamentaria a la Ley de Asociaciones Profesionales.

De aquí en más la ofensiva recorrería toda la estructura partidaria, los sindicatos, las universidades y concentraría su potencia contra algunos de los gobernadores peronistas, combinando lo legal y lo ilegal, predominando uno u otro carácter en relación a la confrontación puntual de que se tratara.

La Tendencia en el FREJULI

⁶ Véanse algunos aspectos sobre la cuestión universitaria en este marco en Bonavena, Pablo: *El rector que no fue: la lucha de los estudiantes de la UBA contra la designación del odontólogo Alberto Banfi en octubre de 1973*. “Primeras Jornadas de Estudio y Reflexión sobre el Movimiento Estudiantil Argentino”. Carrera de Sociología de la UBA. Publicación electrónica de noviembre del 2006.

⁷ Gillespie, Richard: *Soldados de Perón. Los Montoneros*. Editorial Grijalbo. Buenos Aires, 1982. Página 181. Algunas versiones indican que la firma de Perón no estaba en el documento pero que sin embargo lo *"bendijo"*.

⁸ Diario “La Opinión” del 2 de octubre de 1973.

La Tendencia tuvo un gran protagonismo en el proceso que llevó a la concreción de las elecciones en marzo del '73, transformándose en un factor político de alta gravitación con una fortaleza suficiente para disputar espacios al sindicalismo peronista ortodoxo. Si bien la mayor parte de la campaña fue costeadada con el dinero brindado por los gremios, sobre todo por la Unión Obrera Metalúrgica,⁹ el sector juvenil demostró una sostenida capacidad de movilización y una impactante vitalidad militante. Esta realidad fue reflejada en la construcción del FREJULI, ya sea por los triunfos logrados en las elecciones internas celebradas en 1972, como en la provincia de Córdoba donde integró el bloque triunfante, o por su peso a la hora de la negociación. A cada rama del PJ le correspondió el 25 % de los cargos en las listas electorales, quedando para la Tendencia -a través de la Juventud Peronista (JP)- gran parte esa porción (cerca del 18 %¹⁰). La misma proporción fue proyectada para los puestos de los distintos niveles de gobierno y en todas las jurisdicciones políticas.

Más allá de los acuerdos, el armado final de la propuesta electoral resultó muy complicado, al punto que, incluso, las directivas de Perón fueron desconocidas en varios lugares. La convocatoria a la presentación de listas unitarias para los comicios internos, por ejemplo, no fue oída en muchas jurisdicciones. Las apelaciones para evitar “*confrontaciones innecesarias*” tampoco fueron escuchadas. Los candidatos por él sugeridos no siempre fueron respetados (por ejemplo, en Santa Cruz) y ni siquiera hubo unidad en las elecciones generales como ocurrió en Misiones.¹¹ Asimismo, varias elecciones internas debieron ser suspendidas tras sonados escándalos, tal como ocurrió en la Capital Federal. En definitiva, el terreno de la disputa no se conformó según los deseos de Perón. Por el contrario, en lugar de la convergencia y unidad, prevalecieron las desavenencias, las maniobras, las amenazas, los amedrentamientos, las denuncias de fraude, las exclusiones, el boicot electoral y las renunciaciones a cargos gremiales y partidarios. La concurrencia a las urnas para los comicios internos en algunos distritos fue francamente minoritaria y circunscripta a la mera lucha de aparatos, donde no faltaron trompadas y disparos de armas de fuego. Pero hubo una directiva que sí fue acatada. La orden de Perón que indicaba el criterio para constituir las fórmulas provinciales: el

⁹ Bernetti, Jorge Luís: “El peronismo de la victoria”. Legasa. Buenos Aires, 1983. Páginas 80 y 81.

¹⁰ Svampa, Maristela: “El populismo imposible y sus actores. 1973/1976”. Capítulo IX. Nueva Historia Argentina. Tomo 9: “Violencia, proscripción y autoritarismo 1955/1976”. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 2003. Página 397.

¹¹ A pesar de las enérgicas directivas de Perón, las divisiones a niveles provinciales del peronismo sólo fueron superadas parcial y momentáneamente en el momento de la segunda vuelta electoral, aunque en Santiago del Estero las disputas entre fuerzas peronistas retrasaron el ballotage durante mucho tiempo. Carlos Juárez asumió recién en octubre del '73.

puesto de gobernador para un cuadro político y la vicegobernación para el sector sindical.¹² Como veremos, en ambos cargos no fue nombrado ningún miembro de la Tendencia.

Todas estas contradicciones señaladas, como no podía ser de otra manera, no tardaron en salir a la superficie. Una vez en funciones de gobierno, las diferencias ideológicas al interior de la fuerza electoral triunfante no mermaron. Desde ese momento se desplegaron dos ejes de confrontación principales: por un lado, entre las gobernaciones y el gobierno nacional, especialmente a partir de la caída de Héctor José Cámpora; por otro, al interior de cada equipo de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial.

¿Gobernadores de la Tendencia?

Todos los gobernadores del FREJULI aceptaron funcionarios de la Tendencia según el reparto de cargos pactado con anterioridad a las elecciones. Esta situación se replicó en todos los niveles y ámbitos de los aparatos del Estado. Sin embargo, un grupo de ellos fue identificado como los “gobernadores de la Tendencia”. Bajo esta denominación solía ubicarse a los mandatarios provinciales de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz, Salta, San Luis y Catamarca.¹³ Ahora bien, estos gobernadores no aparecen agrupados de conjunto por los investigadores (historiadores, sociólogos, periodistas, etc.) bajo esa localización política. A veces se habla de tres gobernadores influidos por la Tendencia o de de cinco, y no siempre los mismos. Las distintas opiniones tienen fundamento en una realidad incuestionable. Ninguno de estos dirigentes perteneció a las organizaciones guerrilleras peronistas al momento de conformar las fórmulas para las elecciones, ni cuando asumieron funciones.¹⁴ Provenían del nacionalismo o poseían antecedentes como funcionarios del gobierno peronista. La vinculación orgánica de alguno de ellos con Montoneros ocurrió una vez que habían perdido sus cargos, cuando en 1975 nació el Partido Auténtico

¹² La lógica de esta conformación obedecía a la debilidad de la rama política respecto de la sindical, circunstancia que siempre preocupó al viejo general.

¹³ Véase esta caracterización del gobernador de San Luis en Caviasca, Guillermo: “Dos caminos. ERP y Montoneros en los ’70”. Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Buenos Aires, 2006. Cita 16 de la página 133. También, véase Castilla, Eduardo: “Córdoba 1974: el golpe de Perón”. Periódico La Verdad Obrera. Año XI. Nro. 223 del 22/01/07. Página 15. Sobre la localización del gobernador catamarqueño en este grupo, véase Gillespie, R.: “Soldados de Perón...”. Op cit. Página 168. Véase también, Munck, Ronaldo: “Argentina: from anarchism to peronism: workers, unions and politics. 1855/1985”. Capítulo 14: “The return of peronism and labour divided: 1973/1976”. Londres: Zeb Books Ltd. 1987. Página 193.

¹⁴ Claro que las posturas al respecto varían. Marcelo Larraquy, en su libro “López Rega. La biografía”, por ejemplo afirma que la tendencia “*gubernaba*” tres provincias –Buenos Aires, Córdoba y Mendoza- y tenía “*buenas relaciones*” con los

Peronista. Incluso, la Tendencia, junto a varias organizaciones de izquierda, desconfiaba de sus orientaciones políticas, especialmente en el caso de Oscar Bidegain,¹⁵ pero fueron dirigentes que abrieron el juego hacia la JP, actitud que permitió el acercamiento de posiciones. En realidad podemos decir que fueron gobiernos donde hubo, con distinto grado, influencia de la Tendencia frente a dirigentes que demostraron ser permeables, a veces moderadamente, a las corrientes más radicalizadas del peronismo, al mismo tiempo que demostraban una apertura mayor hacia otras fuerzas políticas y una buena predisposición a escuchar los reclamos de la clase obrera y demás sectores populares.¹⁶ Seguramente esta actitud encontraba fundamento, más allá de los posibles giros ideológicos, en su debilidad dentro del justicialismo y frente al poderío sindical ortodoxo. El principal capital político que esgrimían era una probada fidelidad a Perón pero, sin embargo, debieron recibir sus cuestionamientos.

La ofensiva de Perón y de sindicalismo ortodoxo no estuvo circunscripta únicamente a estos gobernadores. Especialmente el sector gremial encabezó la iniciativa, y lo hizo en todas las jurisdicciones provinciales en procura de ganar los lugares ocupados por funcionarios sospechados de “*infiltrados*”.

En San Juan, la CGT denunció “*infiltración marxista*” en la administración del gobernador Eloy Camus. El sindicato ATSA (Trabajadores de la Sanidad) señaló que en la función pública se nombraba gente “*con objetivos extraños al movimiento y para quienes la palabra CGT es mala*”. Las 62 Organizaciones y la central sindical reclamaron por la poca atención que le prestaba el gobernador al movimiento obrero e insistían en que era “*necesario que se tomen medidas con los infiltrados que son conocidos por la policía*”.¹⁷ Un Plenario especial y secreto de la CGT, reunido en octubre del '73, se comprometió a luchar contra el marxismo y advirtió a Camus sobre la presencia de infiltrados en su gobierno.

En Chubut la agresión se orientó en el primer año de gobierno, a diferencia de lo ocurrido en otras provincias, contra el vicegobernador Antonio Campelo sindicado como “*izquierdista*”. Luego, cuando en febrero de 1974 la policía y los sindicalistas ortodoxos asaltaron el local de los trabajadores petroleros -con apoyo de dos ministerios y el intendente de Comodoro Rivadavia- para acabar con “*un complot subversivo*”

governadores de San Luis y Salta. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 2004. Página 212.

¹⁵ En un principio fue catalogado de “*fascista*” por Montoneros. Diario “La Opinión” del 5 de julio y del 17 de julio de 1973 (páginas 10 y 13 respectivamente). “Avanzada Socialista” señalaba que tenía simpatías por Mussolini. Año II. Nro. 90 del 31/1 al 6/2 de 1974. Página 12

¹⁶ Bidegain, por ejemplo, otorgó aumentos celebrando acuerdos con las bases de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) por sobre lo firmado por esta organización en el marco del Pacto Social.

las cosas cambiarían. El vicegobernador pasó al bando más reaccionario y el gobernador procuró mantener la institucionalidad contra la alianza sindical/policial.

El pampeano José Aquiles Regazzolli soportó la imputación de “*izquierdista*”, aunque tal acusación no fuera muy verosímil. La CGT denunció la infiltración en su administración, especialmente luego de la muerte de Rucci ya que, argumentaba, varios funcionarios mostraron satisfacción por ese deceso. También eran objetadas las designaciones de algunos nuevos integrantes del Poder Judicial.¹⁸ Afrontó una seria crisis policial por “*mejoras salariales*” donde la CGT y las 62 Organizaciones actuaron como los representantes de esa fuerza represiva. Estos intentos desestabilizadores eran atribuidos al vicegobernador Rubén Marín, ubicado en el cargo por el sindicalismo ortodoxo.

En Tucumán el conflicto salió a la superficie en octubre del ’73, cuando se vivió una gran crisis entre el Poder Ejecutivo, la Legislatura y la CGT luego de un operativo contra el “*terrorismo*” conducido por el jefe de policía, que fue efectuado conjuntamente por fuerzas policiales, sindicalistas y activistas civiles del peronismo ortodoxo que, armados para la ocasión, realizaron varios allanamientos y detenciones. Los acontecimientos, claramente, traspasaron la legalidad. La “*depuración ideológica*” encabezada por el gobernador incluyó el desplazamiento del Secretario de Planeamiento José Chebaia, del asesor de Cultura y cineasta Gerardo Vallejo y del interventor de Consejo de Difusión Cultural Gregorio Sale. La depuración era encabezada por el dirigente de la UOM y vicegobernador Dardo Molina y las Brigadas Peronistas Trasvasamiento Generacional.¹⁹

También había problemas con el gobernador misionero Juan Manuel Irrazabal), al punto que su trágica muerte y la del vicegobernador César Napoleón Ayrault del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) generó muchas dudas sobre el carácter accidental de la caída del avión donde perdieron la vida.²⁰ El ejecutivo provincial mantenía una dura confrontación con el Partido de la Tercera Posición – peronismo ortodoxo que no participó del FREJULI- que tuvo como epicentro la intervención de la

¹⁷ Diario de Cuyo de San Juan del 2 de noviembre del ’73.

¹⁸ Véase sobre el proceso en La Pampa la interesante y documentada investigación de Asquini, Norberto: “Crónicas del fuego. Luchas populares, peronismo y militancia revolucionaria en La Pampa de los ’70”. Ediciones Amerindia. Santa Rosa, 2006. Para el caso particular de esta cita, véase las páginas 219 y 241.

¹⁹ Diario “La Nación” del 6/1/73. Página 4.

²⁰ El ministro de Economía de la provincia, Ramón Martos, sembró esas dudas explicando que el gobernador se había ganado muchos enemigos al avanzar sobre los intereses de los grandes productores de té y yerba mate. Richard Gillespie, por ejemplo, habla de “*un misterioso accidente aéreo*”. Op cit. Página 168.

intendencia de Posadas, cuyo titular era defendido por Tercera Posición. Respecto de la purga ideológica, el fallecido gobernador manifestó: *“hay un hecho que nos preocupa a todos: buscar la afirmación definitiva doctrinaria del Justicialismo. Es por ello que venimos luchando desde hace veinte años... A todos nos preocupa la infiltración”*, agregando que todos sus colegas gobernadores compartían el *“deseo”* de *“pelear contra la infiltración marxista”*.²¹

Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja, denunció en noviembre del '73 que había sectores del PJ y de la CGT que interferían en su acción de gobierno y salió en apoyo del perseguido Cámpora. Aquí el enfrentamiento entre las 62 Organizaciones y la Tendencia era muy álgido y el Consejo Provisorio del PJ expulsó, en noviembre del '73, a varios afiliados, entre ellos algunos funcionarios del gobierno.

En Formosa la arremetida contra el gobernador provenía, especialmente, de los legisladores provinciales peronistas de extracción sindical pero la crisis no tenía origen en diferencias ideológicas sino en pugnas de poderes locales y una serie de graves irregularidades administrativas y constitucionales. En ese contexto, los sectores del peronismo revolucionario, que no habían apoyado al gobernador en el momento de constituir las listas del FREJULI, se alineó transitoriamente con él junto a las Ligas Agrarias y los sectores políticos más progresistas de la provincia contra el PJ, el MID, la CGT y gran parte del sindicalismo local.²² La Ley 20.564 de intervención provincial, rechazada enfáticamente por la izquierda peronista, argumentaba que la medida se adoptaba *“a los fines de su normalización institucional y de la reorganización de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”*.

En Santa Fe, en cambio, las presiones del ala sindical por *“peronizar”* el equipo de gobierno, impulsadas por el vicegobernador y dirigente de la UOM Eduardo Cuello, no se asentaban en denuncias de *“infiltración comunista”* sino en la filiación partidaria del gobernador Carlos Silvestre Begnis, que pertenecía al MID.²³ Cuello incluso agredió físicamente en su despacho al Ministro de Cultura y Educación, pero el funcionario más asediado por *“infiltrado”* fue el Ministro de Obras Públicas, Ricardo Fischer, también del MID. En las críticas que recibía subyacía el tema de los contratos y las licitaciones

²¹ Diario de Cuyo de San Juan del 22 de octubre del '73. Página 9.

²² Véase los antecedentes de la crisis formoseña en *“Historia pequeña, consecuencia grande”*. Nota de Emilio Petcoff publicada en *“La Opinión”* del 6 de noviembre de 1973. Página 12. Véase un análisis de los motivos de la intervención en *“La necesidad del equilibrio político determina la intervención a Formosa”*. Nota de Luis Sapag publicada en *“La Opinión”* del 18 de noviembre de 1973. Página 10.

²³ Sobre el tema, véase el documento de la CGT Rosario titulado *“¿El peronismo gobierna Santa Fe?”*. Diario *“El Tribuno”* de Salta del 15 de noviembre de 1974. Página 4.

del gobierno provincial. Pero no todo eran negocios. El interventor del Partido, Juan Carlos Lorenzo, declaró refiriéndose al marxismo: *“la infiltración en el Movimiento Peronista no es cosa que deba preocuparnos en el sentido de una eventual desviación ideológica. En el Movimiento, como en el organismo –lo digo como médico- la infiltración de cualquier elemento extraño genera anticuerpos que lo preservan de la posibilidad de que una influencia foránea los desnaturalice”*.

Más allá de estos señalamientos, los gobernadores derrocados fueron con distintas argucias, Obregón Cano en Córdoba,²⁴ Oscar Bidegain en Buenos Aires, Cepernic en Santa Cruz,²⁵ Alberto Martínez Baca en Mendoza²⁶ y Miguel Ragone en Salta. Aquí haremos un breve recorrido de los sucesos vividos por los otros dos gobernadores a veces, como señalé, considerados como miembros de la izquierda peronista.

El caso de San Luis

Elías Adre, candidato del FREJULI, ganó las elecciones de San Luis en la segunda vuelta. Fue intendente municipal de Concarán en 1950, para luego ocupar cargos legislativos y partidarios siempre dentro del peronismo.²⁷ Nada en su historia lo vinculaba con posiciones revolucionarias. Una vez electo, incorporó en su equipo de gobierno a dirigentes vinculados a la Tendencia. Con esta resolución no se diferenciaba en nada del resto de sus colegas. Fue una de sus acciones de gobierno la que comenzó a levantar sospechas sobre una presunta inclinación “izquierdista” a los ojos del sindicalismo ortodoxo: su intervención en el conflicto laboral en la fábrica de Calzado San Luis S.A.²⁸ La empresa había sido

²⁴ Véase Bonavena, Pablo: "Juan Domingo Perón y el contracordobazo". Cuaderno de Trabajo Nro.3. Edición del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján/Red de Editoriales de la Universidad Nacional. Mayo de 1997.

²⁵ Véase de Casatti, Adriana Lis y Gómez, Carlos Norberto: “La intervención federal a la provincia de Santa Cruz. Octubre de 1974”. Publicado en Antognazzi, Irma y Ferrer, Rosa Compiladoras: "Del Rozario a la democracia del '83". Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 1995.

²⁶ Véase Bonavena, Pablo; Maañón, Mariana; Morelli, Gloria y Nieves Flabián: “La caída de Martínez Baca: la conjura ganso-vandorista”. Ponencia presentada a las VI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Universidad Nacional de La Pampa. Octubre de 1997. También, De Marinis, Hugo y Abalo, Ramón: “Mendoza Montonera. Memorias y sucesos durante el gobierno de Martínez Baca”. Editorial Corregidor. Buenos Aires, 2005.

²⁷ En 1963 fue electo legislador provincial por el Partido Unión Popular habida cuenta de la proscripción del Justicialismo.

²⁸ Este establecimiento se instaló en la ciudad en 1970, con las maquinarias que fueron enajenadas a esa sociedad privada, la que originariamente fue propiedad estatal de la provincia, que la adquirió para montar la Fábrica Provincial de Calzado, propósito que nunca se concretó a través de más de ocho años en que las máquinas permanecieron en un depósito. En ese momento la empresa ocupaba aproximadamente a ciento cincuenta personas. Nieves, Flabián: “Las tomas durante el gobierno de Cámpora “. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 2000.

ocupada por sus obreros el 14 de junio del '73, con apoyo de la JP, la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y la Juventud Peronista Secundaria, organizaciones vinculadas por los Montoneros. Los trabajadores denunciaban un “*vaciamiento de la empresa cerrando una fuente de trabajo*”. La CGT local no acompañó la medida informando que, en realidad, los auténticos trabajadores de la fábrica no eran los ocupantes, medida de la que participaba –afirmaron– “*personas extrañas al establecimiento*”. Los directivos de empresa, mientras tanto, recurrieron a la policía en procura de defender su patrimonio, pero ésta no actuó alegando órdenes de la superioridad. Finalmente, Elías Adre intervino la empresa. La medida disparó muchas especulaciones. Algunos empresarios opinaban que el gobernador intentaba, por vía de convalidar ocupaciones de este tipo, llevar a cabo los primeros experimentos en la “*socialización*” de la economía provincial,²⁹ alineamiento de Adre que era considerado como un gesto favorable a la Tendencia.

Con el Documento Reservado las colisiones ideológicas y políticas se acrecentaron. Las autoridades de la municipalidad de la ciudad de San Luis encabezaron la campaña de depuración en la provincia, cuando anunciaron públicamente -el 10 de octubre del '73- su decisión de combatir al marxismo y la infiltración dentro del Justicialismo puntano, mirando hacia el equipo de colaboradores del gobernador. Las disputas se trasladaron inmediatamente a la legislatura, cuando una parte de la misma empujó un apoyo al gobernador contra la opinión de otro grupo de legisladores, que situaba al jefe provincial como alguien que no promovía la limpieza ideológica en complicidad con los Montoneros.

La posición de Adre, más bien, parecía estar a mitad de camino. Hizo pública su evaluación del “Documento” y la “*depuración ideológica*”. No lo avaló de conjunto, sino que destacó los puntos en los que estaba de acuerdo y tomó distancia de otros. En ese momento, octubre del '73, salió al cruce de una versión que cada vez circulaba con más fuerza. La existencia de un grupo de gobernadores montoneros donde él ya era localizado junto a sus colegas de Mendoza, Córdoba, Santa Cruz, Catamarca, Buenos Aires y Salta. En un discurso público procedió a despegarse de las acusaciones, extendiendo esa misma actitud a los mandatarios sospechados. Declaró, tomando distancia de las posturas de izquierda, que “*todos los que somos peronistas somos antimarxistas y más los actuales gobernadores que llevamos treinta años en el movimiento no podemos venir a hablar ahora de marxismo. Yo entiendo que combatir al marxismo es una*

²⁹ Véase Nievas, Flabián: “Las tomas...”. Op cit.

cosa natural del movimiento pero salir a una caza de brujas y buscar fantasmas es una cosa que no comparto plenamente. Yo creo que ningún gobernador peronista va a dejar actuar en su gobierno a marxistas, pero hay que probar que lo son".³⁰

A principios del año '74 el diputado José Carmelo Amerise fue designado interventor del PJ en la provincia. Su primer acto político consistió en una reunión con el gobernador a quién le manifestó que su misión era *"unir al peronismo en pro de los anhelos del líder justicialista General Juan Domingo Perón"*. Inmediatamente, sesionó un Congreso del Partido. Desde allí emergieron serios cuestionamientos al gobernador. El principal, en ese momento, era el apoyo que había brindado Adre al acto de fundación de la JTP local, materializado entre otras cosas, en la puesta a disposición de los vehículos oficiales para facilitar la organización del evento.³¹ Esta disposición, según el comunicado del cónclave, favorecía el divisionismo dentro del sindicalismo peronista puntano, ya que la JTP estaba fuera del *"marco doctrinario del Peronismo"*. Además, señalaba que se venía *"notando una clara, firme y constante desviación ideológica en la conducción del Estado"*, expresada en el rechazo a la inclusión de Isabel Perón en la fórmula presidencial –la misma posición que tuvo Montoneros- y en el hecho de haber tomado medidas de gobierno en apoyo *"a la ideología marxista"*. Como si todo esto fuera poco, el Consejo Provincial del PJ insistía denunciando que en algunas dependencias del gobierno había personas que daban *"apoyo logístico a los centros de instrucción guerrilleros"*. El bloque de legisladores peronistas, por su parte, acusaba al gobernador de no desempeñarse como un *"peronista ortodoxo"* y tener *"desviaciones doctrinarias"* a pesar de reiterar en varias oportunidades que no permitiría *"ningún tipo de desviación ideológica"* en su gobierno, ya que era *"justicialista y no marxista"*.

Otras acusaciones estaban relacionadas con supuestas simpatías con el *"tercermundismo religioso"* y con el apoyo dado por Adre a las autoridades de la universidad local que eran –argumentaban-, *"reconocidas figuras marxistas y no peronistas"*. Igualmente señalaban que las unilaterales resoluciones que tomaba el gobernador dividían al bloque de diputados peronistas.

Prosiguieron atizando el fuego, sistemáticamente, el dirigente sindical Oraldo Britos junto con el presidente del bloque Justicialista Adolfo Rodríguez Saá. La familia Rodríguez Saá era la dueña del diario local *"La Opinión"*, donde encontraban más espacio las críticas que los apoyos al gobernador. Sin embargo, el PJ

³⁰ Diario de Cuyo de San Juan del 20 de octubre del '73. Página 9.

cuestionaba al diario San Luis, por propalar “*información falsa*” favorable al gobierno.

En Villa Mercedes las tensiones repercutían especialmente dentro de la CGT donde el gobernador encontraba varias adhesiones. Los enfrentamientos recrudecieron con la normalización de la esa entidad sindical, que tuvo como ingrediente la ocupación de su local por la policía de la provincia para evitar, a su vez, que sea apropiado por el sector ortodoxo avalado por Britos. Los opositores veían en esta medida la contrapartida del trato dispensado a la JTP.

En enero del '74, las 62 Organizaciones presionaron al gobernador a través de un conflicto en el Frigorífico Machado S.A. Los trabajadores, afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), tomaron distancia de este reclamo, advirtiendo que estaban ante la presencia de una “*táctica divisionista y conspiradora de quienes encerrados en una falsa ortodoxia hacen todo lo contrario de lo que predicán, injuriando y tratando de desfigurar la trayectoria de leales compañeros y soldados del Movimiento Peronista, entre los que se encuentra el gobernador de la provincia, Elías Adre*”.³²

Para esa época, el gobernador viajó a Buenos Aires para exponer ante el gobierno la realidad política de su provincia, con el objetivo de fortalecer su mandato demostrando su adscripción a la política emanada del Poder Ejecutivo. Regresó con un importante respaldo, suerte que no tuvieron algunos de sus colegas en idéntica situación que recibían, además, un sistemático reclamo por su poco apego al Pacto Social.

Los sucesos de Azul fueron otro pretexto para golpear al gobernador. El Plenario del PJ denunció a la “*alianza liberal/marxista*” que ocupaba el gobierno de San Luis, cuestionando especialmente al ministro de gobierno Julio Everto Suárez,³³ al ministro de Bienestar Social Juan Carlos Barbeito y al diputado Jorge Gllell. El conclave opinó que sus presencias en el equipo gobernante demostraba que Adre no acataba las directivas de Perón.

El gobernador contestó estos planteos con una solicitada que agregó muchas más confusión que claridad.³⁴ De manera indefinida denunció “*el intento de grupos marxistas de crear caos en la provincia*” cuando los ataques provenían de la ortodoxia sindical, reafirmó su apoyo y fidelidad a Perón. Se jactó, también, de que en San Luis no había violencia, huelgas ni otro tipo de problemas, demostrando así el buen funcionamiento de los acuerdos entre las diferentes fracciones e intereses en su territorio. Sin embargo, la situación en la

³¹ Diario La Opinión de San Luis del 5 de enero de 1974. Página 1.

³² Diario “La Opinión” de San Luis del 11 de enero del '74.

³³ Fue detenido el 15 de noviembre del '74, acusado de integrar la organización Montoneros.

superestructura distaba mucho de la calma. El mismo Adre cerró con la policía el acceso a la sede del Partido, el 27 de enero del '74, impidiendo un nuevo Plenario. Los delegados del Justicialismo denunciaron la actitud represiva del gobernador y de los funcionarios de la Tendencia.

Dos días después, hubo un oscuro atentado contra el local de los trabajadores del correo (FOECyT). La ortodoxia acusó por el hecho a la JTP. Por considerar que se estaba frente a una burda maniobra, que consistía en un auto/atentado en el momento en que Adre reivindicaba la paz provincial, estalló una grave crisis dentro de la CGT. Las acusaciones y las especulaciones iban y venían.

En ese marco, el 12 de febrero, el delegado de la Policía Federal Horacio Carlos Cores informó que como resultado de una investigación fue detectado un campamento guerrillero en el paraje “Casa de Tigre” del Departamento de San Martín. La supuesta actividad guerrillera había tenido lugar, explicó, durante los meses de diciembre y enero, protagonizada por entre veinte o veinticinco personas. Afirmó que en el lugar se encontraron cápsulas de bala calibre veintidós y anestésicos. Así las sospechas esgrimidas por la ortodoxia oportunamente encontraban ahora una aparente prueba de peso, aunque la mayoría de la clase política local conjeturaba, algunos lo hacían con humor, que el campamento encontrado tuvo seguramente más fines recreativos que subversivos.³⁵ Todas las miradas acusatorias apuntaron hacia los Montoneros. El PJ exigió la renuncia del gobernador por apoyar a la Tendencia y al Peronismo de Base.

Este fue el punto más alto de la escalada contra el gobernador. Adre rechazó, otra vez, los cargos y se trató de aclarar la situación, afirmando que *“la guerrilla pudo justificarse en una oportunidad en que las puertas para el acceso al poder estuvieron cerradas para el pueblo”*. Agregando que, en cambio, *“en ese momento en que tenemos un gobierno con el general Perón al frente no se justifica ninguno de los hechos. Al contrario, hay que repudiarlos”*. Insistió señalando que en San Luis el clima social y político era tranquilo y que el supuesto campamento parecía algo preparado para perjudicarlo.

Para tratar de calmar las aguas, el interventor Amerise dispuso el congelamiento de las actividades del PJ y pidió una definición ideológica de quienes lo integraban junto a un repudio de los infiltrados.

Quince sindicatos de Villa Mercedes salieron en apoyo de Adre, actitud compartida por los intendentes de Naschel, Santa Rosa, Quines y del Valle de Conlara. También respaldaron al gobernador la “Agrupación 20 de Junio” de la Fraternidad de Justo Daract, los dirigentes del Club Social y Deportivo “Termas de Balde”,

³⁴ Diario “La Opinión” de San Luis del 27 de enero del '74.

la Unidad Básica “Sinibaldo Franco” y los trabajadores del Ferrocarril San Martín. El Plenario del Partido Comunista Provincial, por su parte, señaló que, visto lo ocurrido en Córdoba, resolvió oponerse a la intervención del gobierno local sobre la que especulaban varios encumbrados dirigentes sindicales.

De esta manera, hacia fines de febrero, el gobernador sumaba apoyos y la tensión decrecía. No obstante, Adre programó cambios en el gabinete para atemperar aún más los ánimos.

Un tiempo después, cuando las 62 Organizaciones convocaron a elecciones de esa entidad, el cambio en el panorama político se hizo sentir. Una parte del sindicalismo provincial desconoció la iniciativa, restándole poder. El saldo era favorable para el gobernador.

La ortodoxia recuperó entusiasmo luego del Primero de Mayo, cuando Perón echó a los Montoneros de la Plaza de Mayo. La nueva ofensiva fue encabezada por los diputados del PJ. El ex ministro Julio Everto Suárez salió a su cruce denunciándolos como “*vandoristas*”, en una conferencia donde apareció rodeado por dirigentes de la Unión de Estudiantes Secundarios, JTP, JUP y JP.

La nueva arremetida repercutió dentro de algunos sindicatos. En la Unión del Personal Civil de la Nación se desató una feroz interna entre la dirección y el cuerpo de delegados. La misma situación se repitió en la organización de los trabajadores de Vialidad.

El 12 de junio del '74, las 62 Organizaciones efectúan un paro en apoyo a Perón. Con el respaldo del PJ atacaron a funcionarios del gobierno y de la CGT, argumentando que pretendían acabar con el Pacto Social; al mismo tiempo denunciaban que Adre auspició nuevamente un acto de la Tendencia. La JP Lealtad apoyó a Adre y acusó a Adolfo Rodríguez Saá de encabezar el verdadero intento de violar el Pacto Social, al promover en la legislatura aumentos salariales para la administración pública de manera irresponsable y por fuera de las posibilidades de las arcas provinciales. Desde el mismo ángulo, la CGT también salió en defensa del Pacto. La Lista Verde de ATE sumó su respaldo a Adre, junto a los quince gremios peronistas “Paz y Trabajo” de Mercedes, el gremio docente y parte del PJ. Cada bando desplegó sus fuerzas pero las cosas no pasaron a mayores.

El conflicto se reavivó en noviembre y diciembre del '74. En el primer mes, durante la asunción de Julio Domingo Salvatierra como interventor del PJ, unas quinientas personas provenientes de Villa Mercedes, seguidores de Britos, protagonizaron escenas de pugilato en el local donde se efectuó el encuentro,

³⁵ Según testimonios que recogí en la zona el campamento efectivamente fue para el entrenamiento de guerrilleros.

desalojando del mismo a los funcionarios del gobierno y al delegado de la CGT San Luis. Antes habían forcejeado con la policía y violado la puerta de ingreso a la sede partidaria. Adre, que no fue por los incidentes, calificó a los disidentes como “*grupos subversivos*”. Britos respondió: “*el gobernador deberá encarrilarse doctrinariamente*”.³⁶ En diciembre, los problemas volvieron cuando fueron convocados a sesionar los plenarios normalizadores de la CGT de Capital y de Villa Mercedes. El ex-secretario de la CGT que apoyaba al gobernador, Bartolomé Albarracín, no concurrió a los encuentros y promovió su impugnación. Los sectores ortodoxos nombraron autoridades a pesar de las ausencias del sector fiel a Adre. Este grupo de sindicatos, veinticuatro en total, finalmente impugnó las elecciones. El saldo para el gobernador de esta nueva pulseada, dentro de todo, le fue favorable.

Desde allí en más Adre soportó otras presiones de variada intensidad, aunque con su política cada vez más se alejaba él mismo de las sospechas. Así, en diciembre de 1975, realizó un llamamiento para constituir un “*frente pueblo/fuerzas armadas*” para acabar con la subversión.³⁷ Fue derrocado el 24 de marzo junto con el gobierno nacional y estuvo en la cárcel durante cuatro años.

Las disputas en Catamarca

En Catamarca los actores que fundamentalmente hostigaron al gobernador Hugo Mott fueron la CGT y las 62 Organizaciones.³⁸ Los ataques cayeron, en un principio, sobre su Ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro, acusado de tener “*conexiones con sectores extremistas*”. Pero el gobernador no recibió embates de un solo lado. Luego de la llamada “Masacre del Rosario”, ocurrida en agosto del ’74, quedó ubicado como un blanco tanto de la ortodoxia peronista como del conjunto de la izquierda. Allí fueron fusilados dieciséis guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo detenidos en el intento de copamiento del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada ubicado en la provincia. Todos lo responsabilizaron aunque desde ángulos muy diferentes, circunstancia que lo dejó políticamente muy debilitado.

La CGT y las 62 Organizaciones trataron de aprovechar la situación señalando públicamente que el hecho

³⁶ En ese mes Montoneros habría atentado contra el domicilio del intendente de Villa Mercedes, Gastón Mones Ruiz. Diario “El Tribuno” de Salta del 29 de noviembre de 1974. Página 3.

³⁷ Diario Clarín del 12 de diciembre de 1975.

³⁸ El vicegobernador Raúl Sabagh murió durante octubre del ’73 en un accidente aéreo sobre el que no existió la más mínima sospecha que lo vinculara a un atentado como ocurrió con su colega de Misiones.

ponía de manifiesto “*el peligro que significa alentar desde algunas áreas gubernamentales a infiltrados que se identifican con las ideologías y procedimientos rechazados por el Pueblo Argentino*”. Lo consideraban con algún grado de complicidad con los guerrilleros. Desde la izquierda, en cambio, le endilgaban responsabilidad en los asesinatos. Por eso el gobernador declaró rápidamente: “*esto no fue un Trelew*”. Aclaró que los fallecidos de los dos bandos habían caído en combate. No obstante, participó de un acto con la presencia de quienes reprimieron la acción guerrillera y monseñor Pedro Torres Farías, donde exaltó “*la acción del regimiento y de la policía provincial*”,³⁹ actitud que implicaba complicidad con los represores. Incluso había rumores que indicaban que los guerrilleros buscarían vengar a sus compañeros atentando contra su figura.

Las versiones sobre una posible intervención federal a la provincia cobraron cuerpo hacia mediados de octubre del '74. Especialmente a partir del acto recordatorio del “17 de Octubre” en la Plaza 25 de Agosto. Luego de varios oradores, cuando le tocaba el turno para hablar al diputado nacional y dirigente de las 62 Organizaciones, Manuel Isauro Molina, un sector del público lo aplaudió pero otro lo silbó. Estos últimos, además, desplegaron un cartel de apoyo a Mott, a los ministros Alberto del Valle Toro y Rodolfo Morán y que resaltaba la fidelidad a Evita y Perón. Rápidamente se propagaron las escenas de pugilato y hubo exhibición de armas de fuego. Mott saltó del palco y abandonó el lugar a paso sostenido. Cuando Molina finalmente habló, hizo alusiones muy críticas al gobernador.

Mientras tanto la Triple A incrementaba sus amenazas e intimidaciones a los militantes de la Tendencia y hubo atentados contra los domicilios de los abogados de las víctimas de la “Masacre del Rosario”.

Para descomprimir la situación, el 23 de octubre, renunció el ministro de Bienestar Social Rodolfo Morán. Los empleados de ese ministerio respondieron con un paro en su apoyo. El remedio fue peor que la enfermedad. La crisis se extendió a todo el gabinete y proliferaron las dimisiones. Mott señaló que para reemplazar a los renunciantes no consultaría a las autoridades partidarias, aduciendo que ejercitaría libremente las facultades constitucionales que lo habilitaban para nombrar a sus colaboradores. Designó a Mario Mercedes Segura en el cargo que ocupaba Morán. Como Segura fue diputado radical, las 62 Organizaciones y la CGT reclamaron nuevamente “*pureza ideológica*”, declarando a los sindicatos en estado de alerta y movilización por diez días para luego seguir con una huelga por tiempo indeterminado –

³⁹ Diario “La Unión” de Catamarca del 10 de septiembre del '74. “Prensa de Frente”. Boletín Quincenal Nro. 4 del 25/8/0.

amenazaron- si sus opiniones no eran escuchadas por el gobernador. Censuraban la presencia de antiperonistas entre los nuevos designados. Mientras tanto, manifestaron que harían un “*quite de colaboración*” dejando de concurrir a toda audiencia con el gobierno. El planteo fue avalado por veintitrés gremios y la Juventud Sindical Peronista. La medida encontraba argumentos, decían, en “*la anarquía total imperante en todas las áreas de gobierno, la grosera violación de las normas de austeridad dictadas por el Gobierno Nacional, la agresividad permanente hacia el movimiento obrero organizado y el fomento de la discordia y la división en el seno del justicialismo, mediante la infiltración ideológica alentada desde diversos centros del ejecutivo provincial*”. Asimismo, denunciaron un “*desaprensivo manejo de fondos públicos y la falta de aportes correspondientes a los presupuestos de las municipalidades de la provincia*”. Agregaron que Mott, al designar funcionarios antiperonistas, desconocía la autoridad partidaria siendo esta actitud “*un alzamiento contra la verticalidad*” que todo peronista estaba obligado a respetar estrictamente. El Senado también expresó su desacuerdo por los nombramientos. En cambio, el interventor del Partido, Raúl Rapela, mostró mesura señalando que desde el inicio de su gestión encontró “*serios tropiezos*” para la unidad del justicialismo, pero destacó su buen diálogo con el gobernador reivindicando “*las semillas que el gobierno siembra a diario para unirnos*”. Estos dichos, evidentemente, eran un sostén para Mott. El resistido Ministro Toro salió a confrontar afirmando que no creía que el paro fuera acatado por los empleados de la administración provincial. Pero subió la apuesta al opinar que era una “*huelga política*” y que no había “*huelgas legales contra el Estado*”, informando que por eso abriría un sumario a cada empleado que cumpliera con el paro. El argumento generó estupor entre los sectores de izquierda. En cambio, estas declaraciones fueron calificadas por la ortodoxia como un intento de “*perturbar*” a todo el movimiento obrero. Mientras tanto, la apuesta a la acción directa lanzada por la ortodoxia generaba muchos resquemores. Uno de ellos obedecía a las dudas sobre el nivel de acatamiento que alcanzaría la huelga, ya que los trabajadores demostraban mucha indiferencia por esta confrontación. No sorprendió, entonces, que la Unión Ferroviaria y el Sindicato Luz y Fuerza tomaron distancia de las 62 Organizaciones informando que no convocarían al supuesto paro, mientras crecían las versiones sobre una inminente división de la CGT catamarqueña encabezada por ambos gremios. Cuando parecía que la sangre llegaba al río Lorenzo Miguel, por pedido de Isabel Perón, solicitó que la

medida de fuerza sea levantada. Mott respondió al guiño político nombrando a un dirigente que había sido expulsado de la CGT local. Era el secretario General de la UOCRA, Manuel Ortiz, designado subsecretario de Promoción y Asistencia a la Comunidad. Inmediatamente las 62 Organizaciones Nacionales avalaron lo actuado por Mott y Rogelio Papagno, secretario general de la UOCRA nacional, apoyó al gobernador por la iniciativa. Las maniobras descolocaron a la CGT y las 62 Organizaciones catamarqueñas. Rápidamente ambas organizaciones trataron de reponerse a partir de un plenario con veintidós sindicatos y cuatro agrupaciones gremiales peronistas. Respondieron lo que entendía era una provocación pidiendo, nada más y nada menos, la renuncia del gobernador por “*no hacer honor a sus funciones*”. Contraatacaron, una vez más, sembrando sospechas sobre el manejo del dinero provincial e insistieron en denunciar que Toro tenía “*conexiones con sectores extremistas*”. Las embestidas contra este funcionario eran encabezadas, con mucho entusiasmo, por el diputado y gremialista Roque Acosta. Todas estas palabras no pudieron, obviamente, eclipsar la realidad. La suspensión de la medida de fuerza significó un duro golpe para los sindicatos opositores al gobernador, pues quedaba en evidencia la falta de apoyo de la CGT Nacional. Además, el pedido de Isabel Perón les quitó su principal arma de presión.⁴⁰ Asimismo, el interventor Rapela opinó que “*defendiendo al gobernador elegido por el pueblo defendemos el porvenir de Catamarca*”, agregando que Mott no tenía por qué consultarlo sobre sus colaboradores. El gobernador informó que no renunciaría y recibió el apoyo del bloque de diputados peronistas, que manifestó que en Catamarca no existían conflictos institucionales de ningún tipo, opinando que “*el Poder Ejecutivo de nuestra provincia ha evidenciado sensibilidad y tolerancia con todos los sectores de opinión*”. Manifestó que no tenía tiempo para pensar en la renuncia del cargo: “*yo estoy ocupado en trabajar para la provincia*”.⁴¹

El 5 de diciembre la provincia fue sacudida por un impactante acontecimiento. La Policía Federal detuvo a cincuenta supuestos “*subversivos*” desbaratando un plan para matar al gobernador, en reprimenda por los fusilamientos de combatientes en la Masacre del Rosario.⁴² La información era muy poco clara y las personas apresadas no eran todas de la misma organización. Se reeditó así la sospecha sobre la posibilidad de que Mott fuera blanco de un atentado guerrillero para vengar a sus compañeros fusilados.

⁴⁰ Diario “La Nación” del 3/11/74. Pagina 13.

⁴¹ Diario “El Tribuno” de Salta del 29 de noviembre de 1974. Página 3.

⁴² La Secretaría de Derechos Humanos del gobierno nacional actualmente es querellante en la causa que investiga los fusilamientos y las desapariciones en la provincia y Mott fue citado a declarar. Véase diario “Página 12” del 24/7/05 y “La Unión” de Catamarca del 24/6/05.

Cuando finalizaba el año, el jefe provincial promovió nuevos cambios en el gabinete, pero ahora lo hizo consultando al interventor partidario. Al acto de asunción de los flamantes funcionarios concurrió Rapela, las 62 Organizaciones y la CGT, en lo que parecía la instalación de un nuevo clima de convivencia entre actores que habían desplegado un enconado enfrentamiento. También anunció la visita de López Rega a la provincia. La orientación de su gobierno era cada vez más transparente.

No sorprendió, entonces, que en octubre del '75, junto a Elías Adre y demás gobernadores peronistas suscribió un documento, difundido como solicitada en varios medios de comunicación, apoyando a la represión de las Fuerzas Armadas contra las “*bandas mercenarias*”.

A comienzos del año '76, la lucha al interior del PJ recobró intensidad, pero ordenada sobre otro eje ya que en ese momento su supuesta vinculación con los Montoneros era un recuerdo lejano. Con motivo de las elecciones internas de autoridades partidarias se constituyeron dos listas; el Frente de Recuperación Justicialista conducido por Vicente Leónidas Saadi, y el Movimiento de Unidad Peronista que respondía al gobernador Mott. Los duros enfrentamientos generaron un paro de la CGT, con buena adhesión, por “*un peronismo sin caudillos ni sectarios*”. Las fuerzas políticas locales y la Federación Económica de Catamarca evaluaron la huelga como algo insólito por el acotado fin que tenía.

El mandato de Mott, finalmente, se prolongó hasta marzo del '76. Cuando fue depuesto por el Proceso de Reorganización Nacional, quedó en condición de detenido junto a varios colaboradores.

Palabras finales

Con las breves reconstrucciones presentadas se hace observable el tipo de relación de Adre y Mott con la Tendencia y otras fracciones radicalizadas del campo popular.

Tal como adelanté, el vínculo con esta fracción del peronismo tuvo variadas alternativas, pero la intensidad del mismo no permite afirmar que sus políticas se identificaran con las posiciones del peronismo revolucionario.

Ambos gobernadores procuraron, no obstante, mantener cierta independencia frente a la “depuración ideológica” y ante los planteos del sindicalismo ortodoxo y de parte del PJ. Tal vez, y esta es una hipótesis, su permanencia en los cargos, a pesar de los embates recibidos, estuvo relacionada con su cuidado de los lineamientos generales del Pacto Social, vulnerados con mucha frecuencia por sus colegas derrocados. Pero

más allá de esta especulación, su inclusión dentro del supuesto grupo de los gobernadores de la Tendencia queda muy cuestionada. Seguramente no fue casual el hecho de conservar su gobierno hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Pablo Bonavena, julio de 2007.